

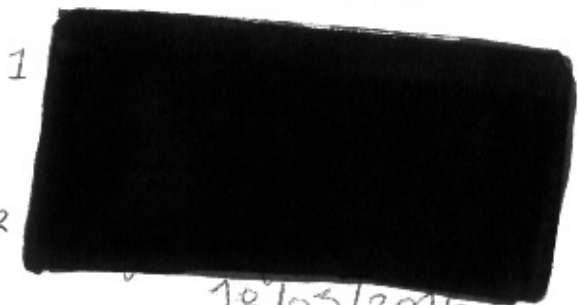


(1) se eliminan 3 palabras  
(2) se elimina 1 rúbrica, antefirma,  
mediafirma o firma.



COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
Vicepresidencia Jurídica  
Dirección General de Delitos y Sanciones

Recibí original



18/03/2016

Fecha de clasificación:	10 de marzo de 2016
Unidad Administrativa:	Dirección General de Delitos y Sanciones.
Reservada:	Todo el documento
Periodo de reserva:	12 años.
Fundamento legal:	Artículo 13, Fracción III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Lineamiento Vigésimo Segundo y Artículo 14, Fracción IV, de la citada Ley y Lineamiento Vigésimo Séptimo.
Confidencial:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Fundamento Legal:	<input checked="" type="checkbox"/> No aplica
Rúbrica:	

Ciudad de México a 10 de marzo de 2016  
Oficio No. 210-119789-SCP/2016

Asunto: Se impone sanción administrativa.

C. JORGE ALFONSO RUBIO DÍAZ  
DIRECTOR GENERAL DE CONCESIONARIA MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.  
JAVIER BARROS SIERRA NO. 540,  
TORRE PARK PLAZA I, PISO 4  
COLONIA SANTA FE  
C.P. 01210 MÉXICO D.F.

De conformidad con lo previsto en los artículos 2, segundo párrafo, 4, fracciones I, XVIII, XIX, XXX y XXXVIII 5, párrafos primero y penúltimo y 12, fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 351 y 391 de la Ley del Mercado de Valores (en adelante indistintamente la "Ley" o la "LMV"); así como atendiendo a lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 4 y 62, del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante el "Reglamento de Supervisión"); esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante indistintamente la "Comisión" o la "Autoridad"), tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público, así como

2 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

a las personas físicas y morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero. De igual forma se encuentra facultada para imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes en materia financiera y disposiciones que emanen de ellas.

Atento a lo anterior, esta *Comisión* observó infracciones a la LMV, así como a las Disposiciones de carácter general que de ella emanan, aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado (en adelante indistintamente "*Disposiciones*" o "*CUE*") razón por la cual inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción, en contra de Usted en su carácter de Director General de Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V., (en adelante "*Connex*", "*Sociedad*" o "*Emisora*", indistintamente), de conformidad con los siguientes:

### RESULTANDOS

1. Mediante oficio No. 210-81884-MMP/2015 de fecha 26 de octubre de 2015 debidamente notificado el día 27 del mismo mes y año, esta *Comisión* emplazó a Usted, en su carácter de Director General de Connex, ya que bajo su responsabilidad, en el ámbito de sus funciones, suscribió los estados financieros 2014 y 2013, los cuales la Emisora elaboró de manera inadecuada conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por esta *Comisión*, por lo que hace al registro de la Rentabilidad Garantizada en los Estados de Posición Financiera, no ajustando su conducta a lo dispuesto por el artículo 44, párrafo tercero, fracción V, de la LMV, en relación con lo previsto por los artículos 104, párrafo segundo, fracción III, inciso a) de la misma Ley, así como lo dispuesto por los artículos 33, fracción I, inciso a), numeral 3 y 78, párrafo primero de las Disposiciones. Dicho oficio se tiene aquí por reproducido, como si a letra se insertase en obvio de repeticiones.
2. Por escrito recibido en esta *Comisión* el 25 de noviembre de 2015 (en adelante el "*Escrito de Respuesta*"), Usted hizo uso de su derecho de audiencia. Dicho escrito se

3 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

tiene aquí por reproducido en todas sus partes, como si a la letra se insertase para todos los efectos a que haya lugar, sin que ello sea óbice que para el efecto de garantizar su seguridad jurídica, los argumentos formulados así como las probanzas ofrecidas, sean analizadas y valoradas a lo largo del considerando CUARTO de la presente resolución.

Una vez analizados y valorados los documentos y demás informes que obran en el expediente en que se actúa, esta Comisión formula los siguientes:

### CONSIDERANDOS

**PRIMERO.-** Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracción XIX, y 12, fracción IV de la *Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores*, así como 391 párrafo segundo de la *LMV*, está facultada para imponer sanciones administrativas por cualquier violación de la Ley mencionada en segundo término y a las disposiciones de carácter general que de ella emanan.

**SEGUNDO.-** En ejercicio de dicha facultad, mediante el *Oficio de Emplazamiento*, notificado el día 27 de octubre de 2015, se comunicó a Usted la presunta irregularidad.

**TERCERO.-** En relación al *Escrito Respuesta* al que se hizo referencia en el Resultando 2 del presente oficio, el mismo se tiene por presentado en tiempo y forma, así como por señalado el domicilio indicado para recibir todo tipo de citas y actuaciones y por autorizadas a las personas que señala para los fines que precisa.

Asimismo, se tienen por realizadas las manifestaciones que a su derecho convienen, mismas que serán analizadas y valoradas a lo largo del Considerando CUARTO del presente oficio.



4 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

En cuanto a las pruebas documentales ofrecidas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 389 de la LMV, se procede a proveer respecto a su admisión en los siguientes términos:

La identificada como Anexo 1, consistente en copia simple de la Interpretación a las Normas Internacionales de Información Financiera 12, denominada "Acuerdos de Concesión de Servicios" (la CINIIF 12); se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, no obstante tratarse de información notoria para esta Autoridad, será valorada durante el desarrollo del Considerando CUARTO de la presente resolución.

Respecto a las documentales privadas identificadas como Anexo 2 consistentes en originales de los escritos y copias certificadas de los escritos de los despachos [redacted] 3, ([redacted] 3), [redacted] 3, ([redacted] 3), [redacted] 3, ([redacted] 3) y [redacted] 3 ([redacted] 3), se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, mismas que serán valoradas a lo largo del Considerando CUARTO del presente oficio.

Asimismo, respecto a las documentales privadas identificadas en el mismo Anexo 2 consistentes en originales de los escritos de [redacted] 3 ([redacted] 3) y Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. -Deloitte- (México), se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, mismas que serán valoradas a lo largo del Considerando CUARTO del presente oficio.

Por lo que se refiere a las documentales privadas identificadas como Anexo 3 consistentes en originales de los escritos emitidos por los asesores legales externos [redacted] 3 y [redacted] 3, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza.

Respecto a la copia simple identificada como Anexo 4 consistente en la respuesta de [redacted] con fecha 25 de septiembre de 2015 al requerimiento de información de [redacted]



(3) se elimina 1 palabra

5 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

Comisión Nacional de Mercado de Valores de España (en lo subsecuente CNMVE) de fecha 4 de septiembre de 2015, en términos del párrafo tercero del artículo 389 de la LVM, no ha lugar a tenerla por admitida, toda vez que no tiene relación con el fondo del asunto, además de que esta Comisión no es competente para pronunciarse sobre la actuación de una Autoridad de una jurisdicción distinta a la nacional.

Y finalmente, por lo que se refiere a la copia certificada identificada como Anexo 5 consistente en copia certificada del memorándum del despacho [REDACTED] <sup>3</sup> sobre el alcance y significado de ciertas actuaciones de supervisión de la CNMVE con respecto a la información financiera de sociedades cotizadas, en términos del párrafo tercero del artículo 389 de la LVM, no ha lugar a tenerla por admitida, toda vez que no tiene relación con el fondo del asunto, además de que esta Comisión no es competente para pronunciarse sobre documentos que se refieren a la actuación de una Autoridad de una jurisdicción distinta a la nacional.

**CUARTO.-** Una vez admitidas y desahogadas las pruebas documentales ofrecidas y, no existiendo pruebas pendientes por desahogar, se procede a analizar en lo particular los argumentos formulados por Usted para tratar de desvirtuar la infracción que se le imputa con motivo de su participación en la realización de actos contrarios a lo mandado por la LMV.

Analizados los argumentos vertidos por Usted, así como los elementos con lo que cuenta esta Autoridad, se corrobora la existencia de la infracción a la norma que se le imputa.

Ello es así, ya que los argumentos hechos valer por Usted, en su carácter de Director General de Connex, resultan insuficientes y por lo tanto no logran desvirtuar la infracción a la norma que se le imputa en términos de lo siguiente:

6 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

Respecto a lo señalado como Cuestión Previa de su Escrito de Respuesta en la que medularmente señala que esta Comisión especificó claramente en el Oficio de Emplazamiento las probables conductas que pudieran resultar contrarias a lo mandado por la LMV y la CUE, las cuáles constituyen la materia del procedimiento administrativo de sanción y que por lo tanto el procedimiento única y exclusivamente debe analizar si, en su caso, se colman o no los extremos de la irregularidad que se le imputa.

Se precisa que esta Autoridad, en todo momento ha salvaguardado su esfera jurídica, respetando las garantías de seguridad jurídica, y legalidad en apego a lo dispuesto por el artículo 391, fracción I de la Ley del Mercado de Valores, otorgándole mediante el Oficio de Emplazamiento un plazo para que en ejercicio de su derecho de audiencia, manifestara lo que a su derecho conviniese, aportara pruebas y formulase alegatos; y que es precisamente mediante el presente oficio que valorarán los argumentos vertidos por Usted.

Respecto a lo señalado en su Escrito de Respuesta, en el apartado Consideraciones previas, en el que esencialmente señala ha ejercido el cargo de Director General de Connex, con leal y correcto desempeño, apegado en todo momento a las políticas internas de la Emisora, así como a las disposiciones que en materia de emisoras de valores resultan aplicables, entre las que se destaca el deber de diligencia y el deber de lealtad, haciendo notar que en todo momento se ha conducido en estricto apego a la normatividad aplicable, las mejores prácticas internacionales en el sector y usos bursátiles, apegándose en todo momento a las políticas de control interno y las políticas contables aprobadas por el Consejo de Administración de la Emisora, y a los procedimientos de auditoría interna y externa establecidos por Connex, tomado en consideración la asesoría brindada por despachos y firmas especializadas en las materias correspondientes, esta Comisión precisa que sus aseveraciones no logran desvirtuar la realización de la conducta infractora que se le imputa.

7 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

En seguimiento de lo anterior y en relación con el argumento relacionado en su Escrito de Respuesta en el apartado de Consideración General, en el cual señala medularmente que Comex sí elaboró sus Estados Financieros (incluidos los estados de posición financiera y los estados de resultados integrales) conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por esta Comisión, toda vez que la Emisora registró correctamente como inversión en concesiones el activo financiero por el derecho incondicional de cobro de la rentabilidad garantizada, derecho que tiene la Concesionaria conforme a lo establecido en el Título de Concesión; en pleno acatamiento de lo que disponen las NIIF aplicables al caso concreto, particularmente, en plena observancia de lo dispuesto por los párrafos 15, 16 y 17 de la CINIIF 12, cuya aplicación al caso concreto deriva de lo establecido por el artículo 78, párrafo primero de la CUE y del Prólogo de las NIIF; realizando asimismo un análisis pormenorizado del párrafo 16 de la CINIIF 12, resaltando que Comex ha acatado en todo momento el marco normativo que rige la materia y que en consecuencia, en su carácter de Director General de la Emisora actuó también, dentro del ámbito de su profesión, funciones y responsabilidades, con el debido cuidado, en estricto cumplimiento al marco normativo aplicable y de buena fe, esta Autoridad señala lo siguiente:

Sobre el particular debe precisarse que para esta Comisión dicho argumento no logra desvirtuar la irregularidad que se le imputa, pues la interpretación y aplicación de las NIIF y CINIIF 12 al caso concreto y en particular al Título de Concesión que regula los derechos y obligaciones entre concesionaria y concedente que realiza Usted, resultan parciales, por lo que, contrario a lo que señala, es válido afirmar que Comex, durante su gestión como Director General, por lo que se refiere a la aplicación de la CINIIF 12 para el registro de la rentabilidad garantizada, elaboró de forma inadecuada sus Estados Financieros de 2013 y 2014, conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por esta Comisión.

8 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

A efecto de sustentar y dilucidar sobre la correcta aplicación y razonabilidad de la política contable al registrar la rentabilidad garantizada, se estima conveniente hacer las siguientes precisiones:

El párrafo 16 de la CINIIF 12, señala:

*“El operador reconocerá un activo financiero en la medida que tenga un derecho contractual incondicional a recibir de la concedente, o de una entidad bajo la supervisión de ella, efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción; y que la concedente tenga poca o ninguna capacidad de evitar el pago, normalmente porque el acuerdo es exigible por estatutos. El operador tiene un derecho incondicional a recibir efectivo cuando la concedente garantiza el pago al operador de (a) importes especificados o determinables o (b) el déficit, si lo hubiere, entre los importes recibidos de los usuarios del servicio público y los importes especificados o determinables, incluso cuando el pago esté condicionado a que el operador garantice que la infraestructura cumple con los requerimientos de calidad o eficiencia especificados.”*

De la transcripción anterior, se desprende que para reconocer un activo como financiero es necesario que concurren los siguientes supuestos:

- (i) Que el operador tenga un derecho contractual incondicional a recibir de la concedente, o de una entidad bajo la supervisión de ella, efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción y;
- (ii) Que la concedente tenga poca o ninguna capacidad de evitar el pago, normalmente porque el acuerdo es exigible por estatutos.
- (iii) Que el operador tenga un derecho incondicional a recibir efectivo cuando la concedente garantiza el pago al operador de (a) importes especificados o determinables o (b) el déficit, si lo hubiere, entre los importes recibidos de los usuarios del servicio público y los importes especificados o determinables.



<sup>9</sup> Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

De conformidad con lo previsto en el título de concesión, se advierte que en la especie, esta Comisión considera que no se actualizan los supuestos para registrar la contraprestación pactada con la Concedente como un Activo Financiero, de conformidad con lo siguiente:

El derecho para solicitar la ampliación de la concesión buscando obtener la total recuperación de la inversión efectuada más un rendimiento no es un activo financiero, lo anterior, en razón de que dicho derecho está sujeto a la condición de que por una causa no imputable a la propia concesionaria (acontecimiento futuro de realización incierta) no se haya logrado recuperar el monto de la inversión más el rendimiento, una vez que concluya la vigencia del título de concesión.

Para efecto de acreditar lo anterior, se tienen por aquí transcritas las cláusulas del título de concesión que prevén las condiciones para solicitar el derecho de prórroga.

- (i) En tal virtud, hasta en tanto se pueda determinar que existe déficit (acontecimiento futuro e incierto) entre los importes recibidos de los usuarios del servicio público (en este caso la "Vía Concesionada") y los importes especificados o determinables (monto de la inversión más la tasa interna de retorno), sería procedente, en su caso, aplicar lo dispuesto en el párrafo 16, inciso b de la CINIIF 12 (cláusula Primera del Título de Concesión de CONMEX).

Párrafo 16 de la CINIIF 12:

*"El operador reconocerá un activo financiero en la medida que tenga un derecho contractual incondicional a recibir de la concedente, o de una entidad bajo la supervisión de ella, efectivo u otro activo financiero por los servicios de construcción; y que la concedente tenga poca o ninguna capacidad de evitar el pago, normalmente porque el acuerdo es legalmente exigible. El operador tiene un derecho incondicional a recibir efectivo cuando la concedente garantiza el pago al operador de (a) importes especificados o determinables o (b) el déficit, si lo hubiere, entre los importes*

10 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

*recibidos de los usuarios del servicio público y los importes especificados o determinables, incluso cuando el pago esté condicionado a que el operador garantice que la infraestructura cumple con los requerimientos de calidad o eficiencia especificados.”*  
(Énfasis añadido)

- (ii) Ahora bien, hasta en tanto exista déficit (acontecimiento futuro e incierto), Conmex debió haber tomado en consideración, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 17 de la CINIIF 12, ya que conforme a los títulos de concesión, la concesionaria únicamente han venido efectuando cargos (cuotas de peaje) a los usuarios de la “Vía Concesionada”. En relación con lo señalado, la norma citada dispone lo siguiente:

Párrafo 17 de la CINIIF 12:

*“El operador reconocerá un activo intangible en la medida en que reciba un derecho (una licencia) a efectuar cargos a los usuarios del servicio público. El derecho para efectuarlos no es un derecho incondicional a recibir efectivo porque los importes están condicionados al grado de uso del servicio por parte del público.”*  
(Énfasis añadido)

A fin de acreditar lo anteriormente señalado, se tienen por aquí transcritos los numerales del título de concesión en los cuales se prevé el derecho de la concesionaria para cobrar cuotas de peaje.

Lo anterior, en razón de que el párrafo 17 de la CINIIF 12 prevé que el derecho para efectuar cargos a los usuarios del servicio público (en este caso de autopistas concesionadas), “no es un derecho incondicional a recibir efectivo porque los importes están condicionados al grado de uso del servicio por parte del público”.

II Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

- (iv) Que como lógica consecuencia de lo anterior, tampoco se actualiza en la especie el segundo elemento para considerar como activo financiero la Rentabilidad a la que tienen derecho las concesionarias.

Ello, en razón de que la concedente sí tiene capacidad para evitar el pago que se refiere, cuando no se acredite por parte de la concesionaria que la falta de recuperación de la inversión (más el rendimiento) se originó por causas no imputables a la propia concesionaria.

En tales circunstancias, resulta evidente que la interpretación que Usted realiza de la CINIIF 12 y su aplicación al Título de Concesión es inadecuada, toda vez que no abarca todos los elementos que la conforman, pues en ningún momento analiza la condición prevista a cargo de la Emisora para, en su caso, otorgar la prórroga a la vigencia del Título de Concesión que nos ocupa.

**Fundamento de las conclusiones que acompaña a la CINIIF 12.** Es de destacarse lo siguiente:

- I. Respecto a lo argumentado por Usted dentro del mismo apartado de Consideración General referente a lo señalado en el FC 41 del Fundamento de las Conclusiones que acompañan a la CINIIF 12, debe señalarse que tales manifestaciones resultan insuficientes para desvanecer la imputación que se le atribuye, toda vez que la infracción que le fue imputada mediante el Oficio de Emplazamiento no consiste de forma alguna en que no se considere al Título de Concesión como un acuerdo de carácter contractual para los efectos de los registros contables y por el contrario, esta Comisión ha reconocido el acuerdo contractual entre el Gobierno Concedente y la Concesionaria respecto al derecho que tienen la Concesionarias a recuperar su inversión y la rentabilidad prevista en el Título de Concesión.

12 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

Resulta imprescindible hacer notar, respecto al mismo argumento que tal y como lo afirma y reconoce Usted, el derecho contractual citado en el párrafo anterior, les produce a los contratantes claras consecuencias económicas y jurídicas que las partes tienen poca o ninguna capacidad de evitar, por ser el cumplimiento del Título de Concesión, legalmente exigible; por lo que al estar expresamente previsto en dicho Título de Concesión que la concedente deberá otorgar la prórroga correspondiente, sí y solo sí, se cumple con la condición de acreditar por parte de la concesionaria que por causas no imputables a ésta, al concluir la vigencia de la concesión no ha recuperado su inversión más el rendimiento previsto, resulta innegable la existencia y exigibilidad de dicha condición.

II. Respecto de la cita que hace Usted de los Fundamentos de las Conclusiones que acompaña a la CINIIF 12, no obstante que las mismas no forman parte de dicha CINIIF 12, tal y como lo señala el prólogo de las NIIF; sin embargo, se destaca lo siguiente:

a) El FC41 se refiere a la naturaleza contractual de recibir efectivo u otro activo financiero, lo cual es utilizado por Usted para afirmar que del título de concesión deriva un derecho contractual para recuperar su inversión y la rentabilidad prevista en el Título de Concesión. Al respecto, esta Comisión coincide con dicho argumento.

El FC40 es invocado por Usted para afirmar que el derecho de la concesionaria es incondicional al estar garantizado y por lo tanto se debe registrar como activo financiero en términos del inciso b) del párrafo 16 de la CINIIF 12. Sobre el particular, esta Comisión aclara que hasta que sea posible determinar un déficit (acontecimiento futuro e incierto) entre los importes recibidos de los usuarios del servicio público (tarifas

13 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

de peaje) y los importes especificados o determinables (monto de la inversión más la tasa interna de retorno) y mientras ello no ocurra, la concesionaria tiene licencia para cobrar cuotas de peaje, lo cual puede, en su caso, reconocerse como un activo intangible. Sirve de fundamento para acreditar lo anterior el párrafo 17 de la CINIIF 12 tal como se desprende de la cláusula Primera del Título de Concesión de CONMEX.

- b) El derecho a cobrar tarifas por parte de la concesionaria está previsto en la cláusula Décima Novena del Título de Concesión de CONMEX, lo cual viene a acreditar la existencia de una licencia para efectuar cargos a los usuarios del servicio público, lo cual puede, en su caso, contabilizarse como activo intangible, en términos del citado párrafo 17 de la CINIIF 12 y sólo en el momento en el que llegara a existir un déficit (acontecimiento futuro e incierto), resultaría aplicable el registro de la diferencia en términos del inciso b) del párrafo 16 de la CINIIF 12.
- c) El FC42 es invocado por Usted para argumentar que la concesionaria tienen un derecho incondicional, toda vez que el gobierno concedente es quien asume el riesgo de demanda. En relación con lo anterior, esta Comisión afirma que de conformidad con el párrafo 16 de la CINIIF 12, en relación con la cláusula Trigésima Octava del Título de Concesión de CONMEX, el gobierno concedente tiene capacidad para evitar el pago, toda vez que la concesionaria está obligada a acreditar que no le es imputable el no haber recuperado su inversión más la tasa interna de retorno.

En razón de lo señalado, resulta infundada la afirmación de que el gobierno concedente asume el riesgo de demanda.

14 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

- d) El FC43 es invocado por Usted para argumentar que el procedimiento de pago a la concesionaria no implica que su derecho de cobro esté condicionado, sino garantizado. Al respecto, esta Comisión sostiene que el derecho de cobro de la concesionaria se ejerce al aplicar a los usuarios el monto de las tarifas de peaje, lo cual, en su caso podría contabilizarse como activo intangible, de conformidad con el párrafo 17 de la CINIIF 12, toda vez que, entre tanto no exista un déficit, la concesionaria debe cobrar cuotas de peaje, de conformidad con la cláusula Décima Novena del Título de Concesión de CONMEX.
- e) El FC44 y el FC45 son invocados por Usted para argumentar que el derecho de cobro de la concesionaria es incondicional, aún y cuándo el pago de la contraprestación esté condicionado al cumplimiento de requerimientos u objetivos de calidad y eficiencia por parte del operador, al existir un déficit garantizado que cubrir. Sobre el particular, esta Comisión reitera que el derecho de cobro de la concesionaria, de conformidad con las cláusulas Trigésima Octava del Título de Concesión de CONMEX, está condicionado a que la concesionaria está obligada a acreditar que no le es imputable el no haber recuperado su inversión más la tasa interna de retorno.

Sin perjuicio de lo señalado y en el supuesto no admitido de que no tuviera la naturaleza de condición la obligación de la concesionaria de acreditar la no imputabilidad del déficit a la misma, ello no excluye la obligación de Conmex de considerar para el reconocimiento contable de la rentabilidad garantizada que el rendimiento de las concesiones deriva en primer lugar del cobro de las cuotas de peaje, así como, en su caso, lo dispuesto en el párrafo 17 de la CINIIF 12.

15 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

D) El FC46 y el FC47 son invocados por Usted para argumentar que el derecho de la concesionaria a cobrar las cuotas de peaje sólo debe registrarse como activo intangible cuando el operador asuma el riesgo de demanda, motivo por el cual, argumenta, la rentabilidad garantizada debe registrarse como un activo financiero y no como un activo intangible. En relación con lo señalado, esta Comisión reitera que el derecho de cobro de las cuotas de peaje no tiene la naturaleza de un activo financiero, considerando lo señalado en el párrafo 16 de la CINIIF 12 y el FC47, tal como ha quedado acreditado a lo largo del presente oficio.

A mayor abundamiento, Usted pasa por alto que incluso el párrafo FC47 establece expresamente que "...el derecho de un operador a cobrar a los usuarios del servicio público cumple con la definición de un activo intangible...".

Cabe señalar que resulta infundado que en el presente caso el gobierno concedente asume el riesgo de demanda, toda vez que conforme a la cláusula Trigésima Octava del Título de Concesión de CONMEX, dicho gobierno concedente tiene capacidad para evitar el pago, en razón de que el derecho de la concesionaria está condicionado a que demuestre que no le es imputable el no haber recuperado su inversión más la tasa interna de retorno.

Resulta pertinente señalar que incluso dichas Consideraciones de la CINIIF 12, contrario a la intención de Usted, soportan la irregularidad que se le imputa en el Oficio de Emplazamiento, toda vez que de las mismas se desprende que el momento en el que debe de determinar si existe o no el derecho de la concesionaria para recibir efectivo de la concedente, es aquel en el que se lleva a cabo el reconocimiento contable del activo que puede o no ser clasificado como financiero, distinguiendo que únicamente se puede afirmar la existencia de ese derecho cuando existe certeza en el momento de su registro contable, respecto a la recepción por la concesionaria de efectivo por la cantidad del déficit

16 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

correspondiente, directamente de parte de la concedente, o bien de la entidad por ella designada para tales efectos, sin que ni siquiera resulte suficiente que sea "altamente probable" dicho derecho, asumiendo el operador el riesgo de demanda y, por tanto, la obtención del rendimiento derivado de la concesión está condicionada por el número de usuarios que usan el servicio público.

De las consideraciones expuestas, queda plenamente acreditado que los argumentos vertidos por Usted resultan insuficientes para acreditar que el registro de la rentabilidad garantizada cumple con los requisitos para considerarse como Activo Financiero.

Una vez analizados los argumentos hechos valer por Usted en el apartado "Consideración General" de su Escrito de Respuesta, sin que los mismos resultaran suficientes para desvirtuar la infracción que se le imputa, se procede a la valoración de las pruebas ofrecidas en el mismo en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 203, y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, (en adelante CFPC), de aplicación supletoria conforme al artículo 389, último párrafo de la LMV, como sigue:

1. La documental privada identificada como Anexo 1, consistente en copia simple de la Interpretación a las Normas Internacionales de Información Financiera 12, denominada "Acuerdos de Concesión de Servicios" (la CINIIF 12); dado que se trata de una interpretación a las normas internacionales de información financiera, información notoria para esta Autoridad, en relación directa con los hechos que nos ocupan, la misma ha sido valorada dentro del análisis de cada uno de los argumentos hechos valer por Usted, conforme ha sido plasmado, de las que se desprende que para que exista un activo financiero debe existir un derecho incondicional de pago, el cual, como ya ha sido analizado es inexistente, pues para otorgar una prórroga a las concesiones se debe de dar por cumplida la condición establecida en las Cláusulas del Título de Concesión, consistente en





(3) se eliminan 17 palabras

17 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

acreditar que por causas no imputables al concesionario no ha recuperado su inversión más el rendimiento previsto, por lo tanto resulta infundado que exista un derecho incondicional de la concesionaria a recibir el efectivo y que el concedente esté obligado a extender la concesión. Asimismo, esta prueba, contrario a la pretensión de Usted, acredita que, en su caso, el déficit entre el cobro de las tarifas de peaje y el monto de la inversión más la tasa interna de retorno se tendría que reconocer como activo financiero, hasta que pudiera determinarse si lo hubiere, de conformidad con el inciso b) del párrafo 16 de la CINIIF 12.

II. Respecto a las documentales privadas incluidas en el Anexo 3 referentes a los escritos emitidos por [REDACTED], esta Autoridad observa que las mismas no tienen validez, toda vez que dichas documentales privadas no fueron suscritas por los representantes legales de las mencionadas personas morales.

Lo anterior, de conformidad con el último párrafo del artículo 203 y del artículo 204 del CFPC, de aplicación supletoria a la LMV de acuerdo con lo previsto en su artículo 389 último párrafo, se considera como autor del documento a aquél por cuya cuenta ha sido formado, es decir, al que lo suscribe, entendiéndose por suscripción la colocación, al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe y puesto que toda persona moral al ser una ficción legal actúa ineludiblemente por medio de una persona física, es que se afirma que dichas documentales privadas carecen de suscripción, no haciendo plena fe de la formación del documento por cuenta del subscriptor, (último párrafo del artículo 204 del CFPC).

III. Respecto a las documentales privadas identificadas como Anexos 2 y 3 consistentes en originales y copias certificadas de los escritos de los despachos [REDACTED]



(3) se eliminan 19 palabras

18 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

[REDACTED] 3  
[REDACTED] 3 y Galaz, Yamasaki, Ruiz Urquiza, S.C. -  
Deloitte- (México), y [REDACTED] 3, las mismas no  
aportan elemento adicional alguno por medio del cual esta Autoridad se  
encuentre en posibilidad de dejar sin efectos la irregularidad que se le imputa a  
Usted, toda vez que en términos del párrafo 16 de la CINIIF 12, los activos  
derivados de la concesión no cumplen con los requisitos de un activo financiero  
ya que las concesionarias tienen el derecho (licencia) a efectuar cargos a los  
usuarios del servicio público, hasta el momento en que sea posible determinar si  
existe un déficit (acontecimiento futuro e incierto) que sea registrable  
particularmente en términos del inciso b) del párrafo 16 de la mencionada  
CINIIF 12, tal como ha quedado demostrado a lo largo del presente oficio  
(cláusula Trigésima Octava de CONMEX.

Finalmente, es de destacarse que las citadas documentales privadas no tienen  
valor probatorio pleno en virtud de lo dispuesto por los artículos 197 y 203 del  
CFPC de aplicación supletoria a la LMV, en términos de su artículo 389 último  
párrafo, en el entendido de que para probar los hechos que se consignan en ellas,  
en su caso, se debieran adminicular con otros medios de convicción.

En tal virtud, queda demostrado que de las documentales privadas en comento se  
desprende que, en su caso, prueban la existencia del derecho de la Concesionaria  
para obtener el Rendimiento de la Concesión en los términos antes señalados,  
sin que dicho derecho califique como "incondicional de pago en efectivo",  
considerando la condición plasmada en las Cláusulas del Título de Concesión; y  
por lo tanto no logran desvirtuar la infracción que se le imputa a Usted.

En cuanto, a los argumentos relacionados en su Escrito de Respuesta  
identificados como Consideraciones Particulares, en los que esencialmente se  
señala que esta Comisión parte de la premisa correcta de que el Título [REDACTED]

19 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

Concesión otorga a la Concesionaria el derecho a recuperar la inversión en el proyecto en cuestión más una tasa interna de retorno calculada después de impuestos sobre dicha inversión o capital de riesgo (la rentabilidad garantizada), lo cual implica un reconocimiento, y que es falso el que la Concesionaria no cuenta con un derecho incondicional de cobro y que el "Procedimiento de Obtención de la Contraprestación Total" sea una condición, debe señalarse que dichos argumentos resultan inoperantes e infundados, en razón de lo siguiente:

- a) De conformidad con el párrafo 17 de la CINIIF 12, Conmex está obligada a reconocer, en su caso, como activo intangible los importes derivados del cobro de las tarifas de peaje, toda vez que hasta que sea posible determinar si existe un déficit (acontecimiento futuro e incierto), éste deberá reconocerse en términos del párrafo 16, inciso b) de la mencionada CINIIF 12, tal como ha quedado demostrado a lo largo del presente oficio.
- b) La cláusula Trigésima Octava del Título de Concesión de CONMEX expresamente prevé una condición para obtener el derecho a cobrar el déficit entre los importes recuperados por el cobro de cuotas y el monto de la inversión más la tasa interna de retorno. Dicha condición, como ha quedado demostrado, consiste en que el déficit citado dependa de acontecimientos externos e inciertos no imputables a la concesionaria; motivo por el cual su derecho no es garantizado sino condicionado.
- c) Resulta improcedente que el "Procedimiento de Obtención de la Contraprestación Total" no es una condición, sino una garantía de obtener la "rentabilidad garantizada", toda vez que dicho procedimiento únicamente se aplica cuando se cumplió la condición de existir un déficit no imputable a la Concesionaria, sino imputable a acontecimientos futuros de realización incierta, tal como se desprende de la cláusula Trigésima Octava del Título de Concesión de CONMEX.

20 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

Resulta inexacto que la posibilidad de prorrogar la vigencia de la concesión no condiciona el derecho de cobro de la concesionaria al subsistir dicho derecho y ser exigible independientemente del plazo que se fije para que la concesionaria recupere su inversión más la tasa interna de retorno. Lo anterior, en razón de que únicamente procede el cobro del déficit cuando se cumpla la condición de que al término de la vigencia de la concesión el citado déficit no sea imputable a la concesionaria, lo cual implica que el cobro del citado déficit se encuentra condicionado por acontecimientos futuros e inciertos que son ajenos e inimputables a la propia concesionaria, tal como se acredita con la cláusula Trigésima Octava del Título de Concesión de CONMEX.

En adición a lo anterior, se debe de tener en cuenta que la vigencia de la Concesión constituye el límite temporal para que se actualice la condición de que se presente un déficit por causas no imputables a la concesionaria.

En el escrito de respuesta existe una afirmación de que la obligación del Gobierno Concedente es condicional, es decir, que está sujeta a condición. No obstante lo señalado, de manera contradictoria afirma que si bien la obligación de la concedente es condicional, el derecho de cobro de la concesionaria no está condicionado por el método de pago. Como puede observarse ello resulta incorrecto, porque toda obligación es correlativa de un derecho y, en el presente caso, si Usted está reconociendo expresamente el carácter condicional de la obligación del Gobierno Concedente, la consecuencia necesaria es que el derecho correlativo a dicha obligación también está sujeto a una condición, tal como se acredita con el texto de la cláusula Trigésima Octava del Título de Concesión de CONMEX.

A fin de sustentar la valoración anterior, cabe precisar que cuando se habla respecto a la existencia de un derecho subjetivo, es decir, atribuible a un sujeto denominado acreedor, que puede exigir de otro denominado deudor, una prestación de dar, hacer o no hacer, implica necesariamente la existencia de la obligación de dicho deudor para dar la

21 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

cosa debida, prestar el hecho debido o bien, omitir una conducta, respectivamente, es decir, se trata de una misma relación jurídica, es decir, que no obstante esa Emisora pretende desmembrar los elementos de una misma relación jurídica, dependiendo de la perspectiva de la relación jurídica se habla (i) de un derecho, cuando se habla desde el punto de vista del acreedor, o bien (ii) de una obligación, cuando se habla desde el punto de vista del deudor; en realidad se está hablando de una misma prestación ya sea de dar, de hacer o de no hacer, como el mismo objeto tanto del derecho como de la obligación.

Así las cosas, respecto a los argumentos por los que Usted sostiene que los conceptos de obligación incondicional de pago y derecho incondicional a recibir efectivo, no son conceptos sinónimos ni equivalentes, resulta necesario subrayar que no se puede hablar de la existencia de un derecho a favor de un acreedor, sin la existencia de una obligación a cargo de un deudor, porque como ya se había mencionado el objeto del derecho es el mismo que el de la obligación correlativa. Por lo anterior, al estar en controversia la naturaleza del objeto, ya sea de un derecho o de una obligación, según se hable desde la perspectiva del acreedor o de la del deudor, respectivamente, es decir, de la Concesionaria o de la Concedente, se está hablando exactamente de lo mismo.

En este sentido, vale la pena especificar que, contrario a lo que Usted señala, la propia CINIIF 12 en su párrafo 16, también se refiere, desde ambos puntos de vista, al objeto del derecho, es decir, desde el punto de vista del acreedor, o de la obligación y desde el punto de vista del deudor, para determinar que el mismo puede ser calificado como un activo financiero, toda vez que los elementos de esa relación jurídica son los siguientes: (i) un derecho, es decir, habla desde la perspectiva del acreedor y que en el caso concreto es la Concesionaria; (ii) contractual, es decir, deriva del acuerdo por el que se concede el servicio; (iii) incondicional; (iv) para recibir efectivo, es decir, de recibir la cantidad debida en efectivo, y (v) de la concedente, es decir, especifica el sujeto pasivo o deudor que debe de entregar esa cantidad de dinero en efectivo al sujeto activo, denominado acreedor, y que por lo tanto, se trata de una obligación de dar.

22 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la Rentabilidad Garantizada no calificaba para ser considerada como un activo financiero en términos de la CINIIF 12, al no cumplir con los Requisitos de un Activo Financiero establecidos en la misma, particularmente respecto a su condicionalidad.

Resulta infundado lo afirmado por Usted, en el sentido de que el no obtener la contraprestación total durante la vigencia de la concesión sólo influye en el método de pago y no tiene la naturaleza de una condición. Lo anterior en razón de que, como ha quedado demostrado, la concesionaria está obligada a acreditar que el déficit entre el monto recuperado por el cobro de las cuotas de peaje y el monto de la inversión más la tasa interna de retorno, no se debe a una causa imputable a dicha concesionaria, lo cual implica la existencia de acontecimientos futuros e inciertos que originan la obligación del gobierno concedente para cubrir el referido déficit (Cláusula Trigésima Octava del Título de Concesión de CONMEX)

Resulta improcedente lo afirmado por Usted en el sentido de que el otorgamiento de la prórroga no es una condición, sino que sólo determina el momento en que el derecho de cobro del déficit será ejercitable por parte de la concesionaria. Lo anterior en razón de que el otorgamiento de la prórroga puede o no darse, siendo un acontecimiento futuro de realización incierta que está en función de: 1) el surgimiento del déficit al vencer la vigencia de la concesión y 2) que dicho déficit no sea imputable a la concesionaria.

Resulta asimismo improcedente lo afirmado por Usted en el sentido de que la incondicionalidad del derecho de cobro de la concesionaria está sujeta a la existencia de una cantidad específica o determinable, o bien, de la existencia de un déficit. Al respecto, ha quedado demostrado a lo largo del presente escrito que la existencia del déficit es un acontecimiento futuro de realización incierta por lo que tiene la naturaleza de una condición, además de que el registro contable de dicho déficit, de ser el caso, se debe realizar hasta que éste se actualice. En ese sentido, aplicando lo dispuesto en el inciso b)

23 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

del párrafo 16 de la CINIIF 12, es de concluirse que el activo registrado como "Rentabilidad Garantizada", no cumplía con los Requisitos de un Activo Financiero.

Por lo que se refiere al argumento relacionado en su Escrito de Respuesta dentro de las mismas Consideraciones Particulares, en donde señala que no debe perderse de vista que la norma aplicable al registro contable (la CINIIF 12) es una norma internacional, por lo que no es posible interpretarla a través de las disposiciones contenidas en una norma local mexicana, el mismo resulta ineficaz para desvirtuar la irregularidad que se le imputa.

Lo anterior, toda vez que las NIIF, incluyendo la CINIIF 12, forman parte del marco jurídico aplicable a las emisoras de valores como es el caso de la Comex en virtud de su incorporación al orden jurídico nacional por la remisión que la propia la LMV y la CUE hacen a las NIIF, pues de lo contrario, no resultarían aplicables, es decir, es precisamente el "derecho común" el que incorpora a las NIIF, en los términos antes señalados.

Así mismo, no se debe perder de vista que la misma CINIIF 12 dispone que se atenderá al contrato que da origen a la prestación del servicio concesionado, así como a la legislación que le resulta aplicable, tal como es reconocido por Usted en el propio Escrito de Respuesta.

Sirve para reforzar lo anterior, el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia con el rubro "LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.", que se transcribe a continuación (énfasis añadido):

"LEYES FISCALES. LA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE SUS  
NORMAS NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN Y

24 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

**APLICACIÓN ESTRICTA Y DE LEGALIDAD QUE RIGEN EN DICHA MATERIA.**

Si bien es cierto que la interpretación y aplicación de las normas impositivas es estricta, también es cierto que resultaría imposible interpretar cada precepto considerándolo fuera del contexto normativo del que forma parte, ya que de ser así, cualquier intento estricto de interpretación resultaría infructuoso para determinar el sentido y alcance de las normas. Toda norma requiere de una interpretación, aunque sea literal, sin importar su rango, ya sea constitucional, legal, reglamentario, contractual o de cualquier otra índole, y un principio de hermenéutica obliga a interpretar los preceptos jurídicos en función a los demás que integran el ordenamiento al que pertenecen, y en función a los demás ordenamientos que integran un determinado régimen jurídico: sin que ello implique que en materia impositiva una interpretación estricta pero al fin y al cabo interpretación, vaya a obligar al sujeto pasivo de la norma tributaria al pago de contribuciones no establecidas en las leyes fiscales. En consecuencia, interrelacionar las normas de manera sistemática no viola el principio de interpretación y aplicación estricta que rige la materia fiscal, ni el principio de legalidad que prevalece en dicha materia, de acuerdo con el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Amparo en revisión 282S/88. Sanko Industrial, S.A. de C.V. 8 de octubre de 1990. Unanimitud de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.

Amparo en revisión 182S/89. Rectificaciones Marina, S. A. de C.V. 23 de noviembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.

Amparo en revisión 1720/90. Administraciones y Coordinaciones, S.A. de C.V. 13 de diciembre de 1990. Cinco votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.

Amparo en revisión 2217/90. Proveedores de Servicios Equipo y Materiales, S.A. 11 de marzo de 1991. Unanimitud de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Abraham Calderón.

Amparo en revisión 873/89. Explosivos Mexicanos, S.A. de C.V. 8 de abril de 1991. Unanimitud de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: José Pastor Suárez Turnbull.



25 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

*Registro IUS No. 207014. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VII, Abril de 1991, página: 24. Tesis: 3a./J. 18/91. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa*

A mayor abundamiento de lo expuesto con anterioridad, particularmente respecto a sus afirmaciones relacionadas con la supuesta "inaplicación" de la CINIIF 12 como norma internacional, con fundamento en el marco normativo nacional, específicamente del Código Civil Federal, así como de los Códigos Civiles del Estado de México y del Distrito Federal, resulta pertinente señalar que no existe incompatibilidad entre el orden jurídico nacional y/o estatal, y el internacional, particularmente, con la CINIIF 12, pues la misma remite a la legislación a la que se encuentra sujeto el acuerdo del que deriva la prestación de servicios concesionados.

Resulta improcedente lo argumentado por Usted en el Escrito de Respuesta, en el sentido de que el rescate no cumple con la definición legal de condición, puesto que su cumplimiento depende del deudor. Al respecto, se señala que el rescate tiene la naturaleza de un acto de revocación de la concesión, por causas de utilidad pública y mediante indemnización, motivo por el cual, al existir causas de utilidad pública que lo motiven, implica necesariamente la existencia de un acontecimiento futuro de realización incierta, toda vez que se desconoce si en un momento determinado se presentarán las circunstancias de utilidad pública que obliguen al gobierno concedente a declararlo e implementarlo. Lo anterior, encuentra su fundamento en lo dispuesto en la cláusula Trigésima Segunda del Título de Concesión de CONMEX.

Respecto del argumento relacionado en su Escrito de Respuesta dentro de las mismas Consideraciones Particulares, que esencialmente señala que "el derecho de cobro de la rentabilidad garantizada que tiene la Concesionaria debe considerarse como un derecho incondicional a recibir efectivo por parte del Gobierno Concedente, susceptible de registrarse como activo financiero" y que "la condición consistente en que los ingresos

26 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

de los aforos reales de peaje sean inferiores a los necesarios para que, durante la vigencia de la concesión, se obtenga la contraprestación total, de ninguna forma condiciona el derecho de cobro de la rentabilidad garantizada que tiene la Concesionaria, sino que, a lo sumo, determina su forma de pago, pero sin que en ningún momento el derecho a recibir la contraprestación total sea incierto”.

Dichos argumentos resultan igualmente insuficientes, ya que Usted hace una interpretación inadecuada de la CINIIF 12, párrafo 16, al señalar que esta Comisión toma en cuenta lo establecido por la misma como condición, siendo que dicho párrafo establece los requisitos para el supuesto de derecho incondicional a recibir efectivo, mismos que en el caso que nos ocupan no se actualizan.

En efecto, resultan inaplicables dichas manifestaciones ya que Usted continúa realizando afirmaciones respecto a que el supuesto derecho de cobro de la rentabilidad garantizada que tiene la Concesionaria se debe considerar como un “derecho incondicional a recibir efectivo por parte del Gobierno Concedente”, a la luz del párrafo 16, inciso b) de la CINIIF 12, sin tomar en cuenta la obligación condicional a cargo de la concesionaria establecida en el Título de Concesión, toda vez que todo derecho es correlativo de una obligación y si la obligación del gobierno concedente es condicional, el derecho correlativo a la misma está sujeto a condición.

Resulta improcedente lo afirmado por Usted, en el sentido de que la existencia del déficit no es una condición que impida a la concesionaria ejercer un “derecho incondicional” de cobro que debe registrarse como activo financiero, sino que se trata de un supuesto previsto por el párrafo 16, inciso b) de la CINIIF 12. Lo anterior, en razón de que la existencia del déficit es un acontecimiento futuro de realización incierta que, de actualizarse por causas no imputables al concesionario, da lugar al nacimiento de la obligación del gobierno concedente de cubrir dicho déficit, ya sea a través del otorgamiento de una prórroga o bien de liquidar su importe, lo cual se acredita con el texto de la cláusula Trigésima Octava del Título de Concesión de CONMEX.

27 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

En virtud de lo anterior, mientras no se cumpla la condición de originarse el déficit por causas no imputables al concesionario, Conmex debió reconocer, en su caso, como activos intangibles los derechos de cobro de cuotas de peaje, de conformidad con el párrafo 17 de la CINIIF 12 y, de actualizarse la condición de que exista dicho déficit, éste deberá registrarse en términos del párrafo 16, inciso b) de la CINIIF 12.

Usted afirma que “la rentabilidad garantizada no depende de la cantidad de usuarios que utilicen la Vía Concesionada, sino que la rentabilidad garantizada es siempre determinable en base al monto de inversión más la tasa interna de retorno pactada en cada título de concesión sin importar la cantidad de usuarios que utilicen la vía concesionada”.

Al respecto, resulta inexacta la afirmación anterior, en razón de que sólo existe la obligación del gobierno concedente de cubrir el déficit entre el importe recuperado por el cobro de cuotas de peaje y el monto de la inversión más la tasa interna de retorno, cuando por causas no imputables a la concesionaria, se presente dicho déficit. Lo anterior, sin perjuicio de que mientras no se pueda determinar la existencia de un déficit, de conformidad con el párrafo 17 de la CINIIF 12, existe la obligación de reconocer, en su caso, como activos intangibles los derechos de cobro de las cuotas de peaje y, hasta el momento en que, de ser el caso, se determinara la existencia de dicho déficit (acontecimiento futuro e incierto), el mismo deberá reconocerse de conformidad con el párrafo 16, inciso b) de la CINIIF 12.

Respecto a la certidumbre e incertidumbre de la existencia de la “rentabilidad garantizada”, conforme a lo anteriormente expuesto, si bien la Cláusula Tercera del Título de Concesión de Conmex, establece que si en la operación de la autopista, el flujo de vehículos resultare inferior al previsto en la proyección de aforos vehiculares la concesionaria tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de la concesión, con la finalidad de obtener la total recuperación de la inversión efectuada, más el rendimiento antes mencionado, ello no quiere decir, que específicamente la Rentabilidad Garantizada

28 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

como parte de la Contraprestación Total, reúna los requisitos de un Activo Financiero y por lo tanto, que haya sido clasificada de forma adecuada en los Estados Financieros Consolidados.

También resulta improcedente su afirmación en el sentido de que el tráfico no repercute económicamente en la capacidad de la concesionaria para recuperar la rentabilidad garantizada. Lo anterior, en razón de que el aforo vehicular determina si existe o no déficit al finalizar la vigencia de la concesión, lo cual es un acontecimiento futuro de realización incierta, por lo que el derecho de cobrar el importe del déficit por parte de la concesionaria, está sujeto a condición.

De igual forma, cabe señalar que resulta improcedente el argumento relacionado dentro de las mismas Consideraciones Particulares que medularmente señala que OHL en las cuentas consolidadas del ejercicio 2010, entendió erróneamente el concepto de "derecho incondicional de cobro" determinando que al tener el Gobierno Concedente la posibilidad de elegir entre ampliar el plazo de la concesión o abonar en efectivo el importe de la Rentabilidad Garantizada, no se cumplía formalmente con dicho requisito, que después de realizar un análisis OHL concluyó que dado que la capacidad de otorgar prórrogas por parte del Gobierno Concedente tiene un límite temporal máximo cumplido el cual se desencadena por parte del Gobierno Concedente la obligación firme de abonar en efectivo el importe de la rentabilidad garantizada, sí existe el "derecho incondicional de cobro" que define la CINIIF 12, por lo cual a partir de 2012 presentó en sus cuentas anuales los derechos de cobro de la rentabilidad garantizada dentro del inciso de "Inmovilizaciones en Proyectos Concesionales", bajo el sub-inciso de "Cuenta por Cobrar".

Asimismo, continúa manifestando que desde el mencionado ejercicio 2010 ha registrado la rentabilidad garantizada como una cuenta por cobrar, que constituye en sí misma un activo financiero, informando además que a partir del ejercicio 2015 va a presentar en sus Cuentas Anuales tanto el inciso "Inmovilizaciones en Proyectos

29 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

Concesionales”, como el sub-inciso de cuenta por cobrar de la rentabilidad garantizada, dentro de un rubro específico denominado ya como “Activo Financiero” (o una terminología similar).

De lo expuesto, resulta conveniente señalar que dichos argumentos resultan no pertinentes para desvirtuar la irregularidad que se le imputa a dicha Sociedad, ya que en el Oficio de Emplazamiento se hizo referencia a lo manifestado por [REDACTED]<sup>3</sup> ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (en adelante la “CNMV”), únicamente como un elemento que reforzaba las consideraciones por las que se realizó la imputación en su contra, y no como medio para acreditar algún hecho constitutivo de la infracción.

De igual forma, se precisa que esta Comisión no es competente para pronunciarse sobre la actuación de una Autoridad de una jurisdicción distinta a la nacional, por lo que respecto a las manifestaciones realizadas por la CNMV, en las que según el dicho de la Sociedad, requirió y/o recomendó, así como la fundamentación y motivación que tuvo para hacerlo, no son vinculantes para esta Comisión, respecto al mercado de valores mexicano.

Sin perjuicio de lo anterior, en relación a que [REDACTED]<sup>3</sup> había clasificado la Rentabilidad Garantizada como un activo intangible en los términos que presentó las Cuentas Anuales Consolidadas e Informes de Gestión correspondientes a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, resulta inadmisibles que Usted manifieste que la clasificación de dicho activo como “Intangible” en realidad se trata de un tema de diferencias en la “terminología”, cuando precisamente los argumentos hechos valer mediante el Escrito de Respuesta son tendientes a sostener que el Registro Contable de la Rentabilidad Garantizada como activo financiero se encuentra apegado a la CINIIF 12, pues si se tratara únicamente de una cuestión de denominación, resultaría irrelevante para Comex su clasificación como activo intangible.

30 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

De igual forma, cabe señalar que resulta improcedente el argumento relacionado en su Escrito de Respuesta dentro de las mismas Consideraciones Particulares, el cual señala esencialmente que la concesionaria tiene un derecho incondicional contractual a recibir efectivo y en consecuencia tiene registrado un activo financiero, mismo que es precisamente la diferencia entre la rentabilidad real obtenida por la operación del proyecto y la rentabilidad garantizada establecida en el Título de Concesión, diferencia que permite mostrar precisamente el rendimiento conforme al Título de Concesión en el resultado neto de la Concesionaria y que aun con las modificaciones al Título de Concesión, dicho derecho incondicional a recibir efectivo subsiste, debido a que, en caso de no obtener los aforos proyectados, el déficit determinado deberá ser cubierto por el Gobierno Concedente.

Ello, en razón de que las modificaciones al título de concesión necesariamente implican modificaciones al derecho condicional de la concesionaria de cobrar el déficit en caso de que éste se presente, puesto que el ampliar la vigencia del título de concesión pudiera traer consigo el efecto de que no se llegue a actualizar el déficit al final de la vigencia de la concesión, lo cual implicaría que en todo momento se debieron reconocer, en su caso, como activos intangibles los importes derivados del cobro de las cuotas de peaje, de conformidad con el párrafo 17 de la CINIIF 12.

También resulta improcedente lo afirmado por Usted en el sentido de que no le resulta aplicable la NIC 36, al tratarse de activos financieros los derechos de la concesionaria. Al respecto, a lo largo del presente oficio ha quedado acreditado que los derechos de cobro de las cuotas de peaje pueden, en su caso, reconocerse como activos intangibles, de conformidad con el párrafo 17 de la CINIIF 12 y, por lo tanto, sí resulta aplicable lo dispuesto en la NIC 36.

Es improcedente el argumento relativo a que el registro de la rentabilidad garantizada en la cuenta de "Otros Ingresos de Operación" es correcto porque la tasa interna de retorno es un ingreso por intereses al que resulta aplicable la NIC 18, en razón

31 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

de que aplicó en forma inadecuada la CINIF 12, al registrar como activo financieros, lo que en su caso son activos intangibles, tal como ha quedado demostrado a lo largo del presente oficio.

Una vez analizados los argumentos hechos valer por Usted en el apartado Consideraciones Particulares de su Escrito de Respuesta, sin que los mismos resultaran suficientes para desvirtuar la infracción que se le imputa, se procede a la valoración de las pruebas ofrecidas en el mismo, reiterándose en obvio de repeticiones lo ya manifestado previamente en la parte conducente del Considerando TERCERO de la presente resolución, por lo que se refiere a los Anexos 2 y 3.

Ahora bien, respecto a la Conclusión que plasma en su Escrito de Respuesta, en la que señala que su actuar en todo momento ha sido transparente y de buena fe frente a la Autoridad y al público inversionista, por encontrarse plenamente apegado a las normas contables que rigen la materia por cuanto hace al registro de la rentabilidad garantizada, siendo procedente que esa CNBV, al emitir la resolución correspondiente a este procedimiento administrativo sancionador, declare la inexistencia de infracción alguna a la normatividad aplicable y, en consecuencia, se abstenga de imponer sanción alguna.

Esta Autoridad previa valoración de todos los argumentos vertidos por Usted en su Escrito de Respuesta, aclara que la misma no logró desvirtuar la irregularidad que se le imputa, toda vez que no apegó su actuar a lo dispuesto por el artículo 44, párrafo tercero, fracción V, de la LMV, en relación con lo previsto por los artículos 104, párrafo segundo, fracción III, inciso a) de la misma Ley, así como lo dispuesto por los artículos 33, fracción I, inciso a), numeral 3 y 78, párrafo primero de las Disposiciones, ya que, en su carácter de Director General de Connex, bajo su responsabilidad, en el ámbito de sus funciones, la Emisora elaboró de manera inadecuada sus estados financieros de 2014 y 2013, conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por esta Comisión, por lo que hace al registro de la Rentabilidad Garantizada en los Estados de Posición Financiera.

32 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

Ello es así, dada la inexistencia de un derecho incondicional de pago, ya que de las Cláusulas del Título de Concesión, se desprende que el derecho de la concesionaria se encontraba sujeto a las condiciones referidas a lo largo del presente oficio.

No obstante lo anterior, es importante señalar que en tales circunstancias y tomando en consideración que de los argumentos vertidos por Usted, no se desprende elemento adicional alguno que haga llegar a esta Autoridad a la hipótesis del desvanecimiento de la irregularidad, se corrobora en todos sus términos la contravención que se le imputa.

**QUINTO.-** En virtud de que ha quedado plenamente acreditada la infracción cometida Usted en su carácter de Director General de Conmex, y dado que no fue desvirtuada, conforme a lo expresado en el Considerando CUARTO de la presente resolución, esta Comisión procede a imponer la sanción administrativa correspondiente de acuerdo a lo siguiente:

### INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS MULTAS

Usted, en su carácter de Director General de Conmex se ha hecho acreedor a la sanción prevista en la LVM vigente al momento de cometerse la infracción, la que en ejercicio del arbitrio que la propia Ley le concede esta Comisión determinará atendiendo, además de las circunstancias especiales o causas particulares en que se cometió la infracción de que se trata, las cuales se precisaron en el considerando CUARTO, tal y como lo dispone el texto del artículo 391 fracción III de la referida LMV, los siguientes elementos:

#### A. EL IMPACTO A TERCEROS O AL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE HAYA PRODUCIDO O ESTÉ PRODUCIENDO LA INFRACCIÓN;

En el caso concreto, este Órgano Desconcentrado toma en consideración que si bien Conmex, bajo su responsabilidad como Director General, elaboró de manera inadecuada sus Estados Financieros de 2014 y 2013, conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por esta Comisión, por lo que hace al registro



33 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

de la Rentabilidad Garantizada, en los Estados de Posición Financiera, en los términos precisados en el Considerando CUARTO del presente oficio, no se produjo un impacto a terceros ni al Sistema Financiero Mexicano.

**B. LA REINCIDENCIA, LAS CAUSAS QUE LA ORIGINARON Y, EN SU CASO, LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS POR EL PRESUNTO INFRACTOR.**

1. Reincidencia. En este caso, Usted, en su carácter de Director General de Connex, no se ubica en el supuesto de reincidencia, entendiéndose por reincidente, en términos de lo dispuesto por el artículo 391, fracción III, inciso b) de la LMV, al que incurra en una infracción que haya sido sancionada y, en adición a aquélla, cometa la misma infracción, dentro de los dos años inmediatos siguientes, a la fecha en que haya quedado firme la resolución.
2. Acciones correctivas. No se cuenta con evidencia de que Usted, en su carácter de Director General de Connex, haya realizado acción correctiva alguna.

**C. LA CUANTÍA DE LA OPERACIÓN EN RELACIÓN CON LA CUAL SE COMETIÓ LA INFRACCIÓN RESPECTIVA;**

En el caso que nos ocupa la conducta atribuible a Usted, en su carácter de Director General de Connex, no puede ser cuantificable.

**D. LA CONDICIÓN ECONÓMICA DEL INFRACTOR A EFECTO QUE DE LA SANCIÓN NO SEA EXCESIVA, Y**

De conformidad con la información financiera con que cuenta esta Comisión, se determina que Usted, en su carácter de Director General de Connex, cuenta con la

34 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

capacidad económica suficiente para cubrir el monto de la multa a imponer, misma que en todo momento será proporcional a la gravedad de la infracción cometida, tal y como se establece a lo largo de la presente resolución.

En seguimiento de lo anterior, cabe precisar que para la determinación del monto de la multa de igual forma se toma en cuenta la capacidad económica del infractor, de acuerdo con la Jurisprudencia P./J. 17/2000 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la sanción se debe individualizar entre el mínimo y máximo permitido.

Por lo cual, en aras de actuar con apego a los principios constitucionales de individualización de las sanciones, así como el de no imponer multas excesivas, este Órgano Desconcentrado considera la capacidad económica del infractor.

Cabe señalar, que al determinar el importe de la multa a imponer, esta Comisión considerará su capacidad económica, solvencia y liquidez, para que con la imposición de la misma, no se afecte su capacidad de pago para dar puntual cumplimiento a sus obligaciones. En ese sentido, en el Resolutivo del presente oficio, se acredita que dicho total no afecta las posibilidades económicas del infractor.

Asimismo, se destaca que de la revisión a los expedientes que obran en esta Comisión, se pudo observar que por lo que respecta a la infracción notificada en el Oficio de Emplazamiento, no se tiene antecedente alguno de que Usted haya sido sancionado previamente por el mismo supuesto de infracción, por lo que se le considera infractor primario.

#### **E. LA NATURALEZA DE LA INFRACCIÓN COMETIDA.**

Partiendo de la base de que esta Autoridad tiene por objeto supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras, a fin de procurar su





35 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

estabilidad y correcto funcionamiento, mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto, en protección de los intereses del público, así como a las personas físicas y morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al sistema financiero, a la LMV le corresponde desarrollar el mercado de manera equitativa, eficiente y transparente, protegiendo los intereses del público inversionista, minimizando el riesgo sistémico y fomentando una sana competencia entre los intermediarios financieros; salvaguardando con ello la estabilidad e integridad del sistema financiero mexicano al fomentar su eficiencia y desarrollo incluyente en beneficio de la sociedad, para el logro de lo cual resulta indispensable el puntual cumplimiento y debida observancia de lo mandado por dicho ordenamiento, así como de lo previsto por las disposiciones de carácter general que emanan del mismo.

En ese sentido y a fin de estar acorde con los estándares internacionales y con el propósito de reforzar la confianza del público inversionista en nuestro país, se ha fortalecido la legislación, con el propósito de dotar de mayor seguridad jurídica al mercado, estableciendo para ello mecanismos que permitan asegurar al público inversionista que la información financiera, económica, contable y administrativa que se envía a esta Comisión y se hace del conocimiento del público, corresponde a la real situación de las Emisoras, a fin de infundir mayor confianza en el inversionista y alentar su participación en el mercado.

No obstante lo anterior, esta Comisión en ejercicio de sus facultades de supervisión observó que bajo su responsabilidad, en el ámbito de sus funciones, en su carácter de Director General de Connex, la Emisora elaboró de manera inadecuada sus Estados Financieros de 2014 y 2013, conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por esta Comisión, por lo que hace al registro de la Rentabilidad Garantizada, en los Estados de Posición Financiera en los términos precisados en el Considerando Cuarto del presente oficio; de ahí el grado de gravedad de la conducta infractora que se le atribuye, misma que fue detectada

36 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

mantenida en la forma expuesta en este procedimiento, destacando que los elementos de hecho y de derecho que conforman la irregularidad son suficientes para demostrar la no adecuación a la normatividad contable, sin embargo, en la conducta no se revela la intención dolosa de afectar el bien jurídicamente tutelado en materia bursátil ya que solo se aprecia una inadecuada interpretación y aplicación de la normatividad contable.

Lo anterior, no obstante que el marco regulatorio establece que los Estados Financieros deberán ser elaborados con base en los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por esta Comisión, lo cual no fue considerado en su totalidad por Conmex, bajo su responsabilidad en el ámbito de sus funciones como Director General de Conmex.

De igual forma, este Órgano Desconcentrado considera la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones legales y administrativas aplicables, como en el presente caso, de tal manera que la multa a imponer inhiba la comisión de infracciones y propicie que Usted, en ejercicio de su cargo como Director General de Conmex se apegue al marco legal que rige a las emisoras de valores.

### PARÁMETROS PARA CUANTIFICAR LAS MULTAS

**SEXTO.-** Como ha quedado acreditado a lo largo del presente oficio, la conducta que realizó Usted consistente en que bajo su responsabilidad en el ámbito de sus funciones, en su carácter de Director General de Conmex, suscribió los Estados Financieros 2014 y 2013, los cuales la Emisora elaboró de manera inadecuada conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por esta Comisión, por lo que hace al registro de la Rentabilidad Garantizada, en los Estados de Posición Financiera, en los términos precisados a lo largo del Considerando Cuarto del presente oficio, así como cada uno de los elementos analizados, además de las circunstancias especiales o causas

37 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

particulares en que se cometió la infracción de que se trata, será considerado al momento de la cuantificación de la sanción respectiva.

En tal virtud, resulta necesario atender al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación que establece que para imponer el máximo de sanción, debe demostrarse que se está en el supuesto de extrema gravedad, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa, pues aún y cuando la conducta realizada por Usted no es adecuada, tal y como se desprende del análisis a cada uno de los elementos requeridos para la individualización de las sanciones, lo que permitió concluir que para este caso no resultaría procedente imponerle el monto máximo permitido por la LMV, pero sí que se le imponga una sanción que resulte adecuada a la realización de la conducta que se indica, tomando en cuenta la particularidad del caso.

Sobre el particular, cabe precisar que la Autoridad tiene la facultad para fijar el monto de la multa cuando la ley señala el mínimo y el máximo de sanción, por lo que al imponer la que corresponda debe tomar en cuenta los antecedentes personales, la condición económica del infractor, la naturaleza, la gravedad de la infracción cometida, las atenuantes, la cuantía de la operación en su caso, la reincidencia, la no existencia de afectación a terceros o del propio sistema financiero, así como la conveniencia de evitar prácticas establecidas para infringir en cualquier forma las disposiciones legales o reglamentarias, cuyas circunstancias constituyen lineamientos genéricos que en este caso la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ignora, porque hace las adecuaciones al caso concreto, tomando en consideración las características peculiares y específicas del caso. En ese sentido, es de precisarse que del texto de las disposiciones aplicadas no se desprende que la intención del legislador haya sido convertir la imposición de las sanciones en una facultad reglada, sino sólo dar una pauta de carácter general que la Autoridad debe seguir a fin de que la sanción que imponga esté debidamente motivada.

38 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

Lo expuesto, permite observar que no todas las infracciones afectan por igual, sino que existe un grado menor o mayor de afectación, por lo que el monto de la sanción a imponer se fijará, en términos del RESOLUTIVO ÚNICO del presente oficio.

**SÉPTIMO.-** Por todo lo antes expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 392 fracción I, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores, vigente al momento de cometerse la infracción, así como 4, fracción XIX, y 12, fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, este Órgano Desconcentrado ha determinado imponer a Usted, en su carácter de Director General de Conmex, la multa a que se ha hecho acreedor, en términos del siguiente:

### RESOLUTIVO

**ÚNICO.-** Bajo su responsabilidad, en el ámbito de sus funciones como Director General de Conmex, suscribió los Estados Financieros 2014 y 2013, los cuales la Emisora elaboró de manera inadecuada sus conforme a los principios de contabilidad emitidos o reconocidos por esta Comisión, por lo que hace al Registro de la Rentabilidad Garantizada, en los Estados de Posición Financiera, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 44, párrafo tercero, fracción V, de la LMV, en relación con lo previsto por los artículos 104, párrafo segundo, fracción III, inciso a) de la misma Ley, así como lo dispuesto por los artículo 33, fracción I, inciso a), numeral 3 y 78, párrafo primero de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, el artículo 392 fracción I, inciso c) de la LMV vigente al momento de cometerse la irregularidad establece como sanción una multa de 10,000 a 100,000 días de salario; por lo que atendiendo a las consideraciones que han quedado detalladas a lo largo del presente, corresponde aplicar una multa equivalente a 28,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal<sup>1</sup>

<sup>1</sup> De conformidad con el Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, todas las menciones al salario mínimo como referencia para determinar la cuantía de las obligaciones, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA)

39 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

momento de cometerse la infracción (2015) a razón de \$70.1 que representa el 20% del monto máximo de la sanción a imponer y que equivale a la cantidad de \$1'962,800.00 (Un millón novecientos sesenta y dos mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), misma que por su monto no resulta desproporcionada ni excesiva respecto de su capacidad económica.

Es de señalarse que al imponerse las multas antes citadas, esta Comisión da cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse tomado en cuenta la gravedad de las infracciones en que incurrió Usted, el impacto que su conducta pudo producir en el Sistema Financiero, así como el que no se ubicó en el supuesto de la reincidencia, no se revela la intención dolosa de afectar el bien jurídicamente tutelado en materia bursátil ya que solo se aprecia una inadecuada interpretación y aplicación de la normatividad contable, tal y como quedó acreditado a lo largo de la presente resolución.

Por lo que, esta Comisión, al establecer la multa, consideró su capacidad económica, su solvencia, su liquidez y que la misma no pone en riesgo sus compromisos de pago.

La presente Resolución fue aprobada por la H. Junta de Gobierno de esta Comisión en la sesión extraordinaria celebrada el 9 de marzo de 2016, mediante Acuerdo Noveno, conforme a lo dispuesto por el artículo 12, fracción IV de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

En la inteligencia, que atento a lo previsto por el artículo 390 de la LMV, el cual establece que "las multas que la Comisión imponga deberán ser pagadas dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. Cuando las multas no se paguen dentro del plazo señalado, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos que establece el Código Fiscal de la Federación para este tipo de supuestos...".

40 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

Sin embargo, en el supuesto de que la multa de que se trata se pague dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la presente, su monto se reducirá en un 20% (veinte por ciento), siempre y cuando no se interponga medio de defensa alguno en contra de la misma, para lo cual es necesario descargar la hoja de ayuda del portal de esta Comisión ([www.cnbv.gob.mx](http://www.cnbv.gob.mx)), en el apartado "TRÁMITES Y SERVICIOS", la opción "Pago y Adeudo de Derechos (SCPADI)". El pago se puede realizar en efectivo o con cheque del mismo banco a nombre de "Tesorería de la Federación", o por transferencia electrónica. Los bancos autorizados para recibir los pagos a través del e5cinco se pueden consultar en el siguiente link: [http://www.sat.gob.mx/sitio\\_internet/e\\_sat/oficina\\_virtual/dpa/116\\_4901.html](http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/oficina_virtual/dpa/116_4901.html)

Para realizar el pago a través de ventanilla bancaria será necesario presentar la "Hoja de Ayuda" debidamente requisitada y en caso de hacerlo mediante transferencia electrónica, una vez obtenida la "Hoja de Ayuda" se deberá ingresar a la liga de Bancos Autorizados para realizar dicho pago y capturar los datos que el portal de la Institución Bancaria seleccionada solicite, en el entendido de que el pago que se realiza por Multas y Sanciones Impuestas por la CNBV, es considerado un pago por concepto de productos o aprovechamientos. Para cualquier duda o aclaración comunicarse a los teléfonos que en la misma página aparecen. Y dentro de los 5 días hábiles siguientes de efectuado el pago deberá comunicarse por escrito o a través de los correos electrónicos: [gpatinom@cnbv.gob.mx](mailto:gpatinom@cnbv.gob.mx) y [jaceves@cnbv.gob.mx](mailto:jaceves@cnbv.gob.mx), acompañándose copia del comprobante respectivo.

Por otro lado, se hace del conocimiento de Usted que, en caso de existir inconformidad en contra de la presente resolución administrativa, podrá optar en defensa de sus intereses, por interponer el recurso de revisión, en la forma y términos señalados en la LMV o, en su caso, intentar la vía jurisdiccional que corresponda.

Los miembros de la Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria celebrada el 9 de marzo de 2016, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16, fracción VI de la Ley



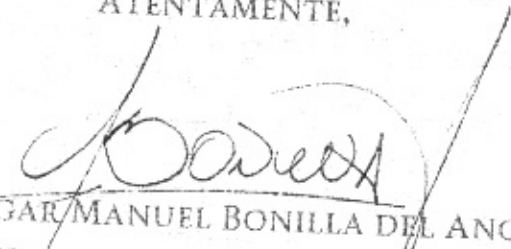
41 Oficio No. 210-119789/2016  
C. Jorge Alfonso Rubio Díaz

de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 6 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por Acuerdo Décimo Tercero instruyeron al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que ejecute el Acuerdo Noveno.

La notificación de la presente Resolución se realizará con base al Acuerdo Décimo Cuarto adoptado en la sesión de la H. Junta de Gobierno a que se ha hecho referencia en los párrafos precedentes, en términos de lo previsto por los artículos 16, penúltimo y último párrafos de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con lo dispuesto por el 4, 6, 9 y 12 del Reglamento Interior previamente citado, por conducto del Presidente, Vicepresidente Jurídico, o por los servidores públicos adscritos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que cualquiera de los dos primeros designe.

Con fundamento en los artículos 16 último párrafo de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 12 y 54 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, firma en suplencia por ausencia del PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, el Vicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

ATENTAMENTE,



LC. EDGAR MANUEL BONILLA DEL ANGEL  
VICEPRESIDENTE JURÍDICO

C.c.p. C.P. Gloria Paola Fragoso Contreras.- Directora General de Supervisión de Conducta de Participantes del Mercado.- para su conocimiento.



Motivación de la Clasificación del "Oficios de Sanción emitido al C. Jorge Alfonso Rubio Díaz, con el número de oficio 210-119789-SCP/2016" emitidos por esta Dirección General de Delitos y Sanciones.

Elaborada de conformidad con el artículo 10 de los "LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL", publicados en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.) el 13 de abril de 2006.

- (1) El nombre de la persona física es un dato personal en tanto que identifica o hace identificable al titular.
- (2) La rúbrica, antefirma, media firma o firma, es un dato personal en tanto que identifica o hace identificable al titular.
- (3) Información relativa a personas físicas y/o morales, terceras al procedimiento.

Fundamentación y Motivación:

Por lo que respecta a las referencias anteriores [(1), (2), (3)] del presente oficio se Fundamentan y Motivan dentro del artículo 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el D.O.F. el 11 de junio de 2002.